

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009

Vistos los autos "Recurso de hecho deducido por la defensa de empleados policiales en la causa Bobadilla, Jorge Raúl y otros s/ homicidio en agresión - tres hechos en concurso real —causa n° 20.246/05—", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, al declarar formalmente inadmisibile el recurso de casación deducido por la defensa, dejó firme el pronunciamiento de la Cámara Segunda en lo Criminal de la III Circunscripción Judicial, en cuanto rechazó el pedido de prescripción de la acción penal planteado por la defensa de los imputados.

Contra aquella decisión la vencida dedujo recurso extraordinario, cuya denegación dio lugar a la presente queja.

2°) Que en el recurso extraordinario, bajo la invocación de la doctrina de la arbitrariedad, la recurrente alegó que el pronunciamiento apelado, al omitir la aplicación del art. 67 del Código Penal —con las modificaciones introducidas por la ley 25.990—, había conculcado el derecho de defensa en juicio y las reglas del debido proceso.

A su vez, consideró que en este proceso se habían afectado las garantías previstas por los arts. 9º, inc. 3º, y 14, punto 3.c, del Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7º, inc. 5º, y 8º, inc. 1º, del Pacto de San José de Costa Rica, y 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, ya que se encontraban vencidos todos los plazos razonables para la duración de un proceso penal, circunstancia que tornaba de aplicación la doctrina sentada por esta Corte en el caso "Barra" (Fallos: 327:327).

3°) Que si bien este Tribunal tiene dicho que las decisiones que rechazan la defensa de prescripción no constituyen sentencias definitivas, en tanto no ponen término al pleito ni impiden su continuación (Fallos: 236:392; 238:487; 279:16, entre otros), también ha sentado el criterio de que dichas resoluciones pueden ser equiparadas a definitivas en cuanto a sus efectos, en la medida en que "cabe presumir que hasta la sentencia final puede transcurrir un lapso tan prolongado que, por sí solo, irroque al procesado un perjuicio que no podrá ser ulteriormente reparado" (Fallos: 301:197).

4°) Que mediante la compulsa del expediente principal se advierte que la "razonabilidad" en la duración del trámite de este proceso no puede afirmarse bajo ningún punto de vista. En este sentido, cabe relevar las siguiente secuencias procesales:

-el día 30 de noviembre de 1993 la Cámara Segunda de San Carlos de Bariloche —tras la realización del juicio oral— condenó a cinco de los ocho imputados por considerarlos autores responsables del delito de homicidio en agresión —hecho acaecido el 24 de diciembre de 1992—, imponiendo diversas penas de prisión (fs. 1472/1701 del expediente principal).

-a su turno, el superior tribunal local, con fecha 22 de septiembre de 1994, anuló el debate y la sentencia dictada, en cuanto disponía las condenas penales y civiles, y devolvió el expediente para la sustanciación de un nuevo juicio (fs. 1895/1904).

-por su parte, la Cámara Primera de San Carlos de Bariloche, con fecha 11 de marzo de 1996, declaró la nulidad de las declaraciones indagatorias recibidas a fs. 225/238, de sus ampliaciones de fs. 680/687 y 896/912, del auto de procesamiento de fs. 688/715 y del decreto ampliatorio de fs. 930/937, y del requerimiento de elevación a juicio de fs.

956/969; en virtud de ello devolvió el expediente a primera instancia para que se sustancie nuevamente el sumario (ver fs. 2302 y 2353 vta.).

-el 15 de marzo de 1996, el juez de instrucción que recibió el expediente se excusó de intervenir por haber actuado como fiscal en el proceso (fs. 2240); por su parte, el juez subrogante que le siguió por orden de turno, Dr. Jorge Pafundi, con fecha 20 de marzo de 1996 (fs. 2241), se inhibió de entender en la causa en virtud del sobreseimiento parcial que había dictado a fs. 2186.

-a partir del 27 de marzo de 1996 los sucesivos magistrados a quienes se les remitió el sumario, de acuerdo al orden de turno legalmente fijado, se excusaron de actuar en la causa por diversas razones; con fecha 1° de julio de 1996, la Dra. Siedlecki —agente fiscal actuando como jueza subrogante— a la par de oponerse a las inhibiciones planteadas y remitir la cuestión a la alzada, fijó las audiencias respectivas para recibirles declaración indagatoria a los imputados (fs. 2256).

-con fecha 9 de agosto de 1996, la Cámara Primera en lo Criminal rechazó la inhibición planteada por el Dr. Jorge Pafundi y le remitió el expediente para que continuara con su tramitación; sin embargo, el aludido magistrado suspendió las audiencias fijadas a fs. 2256 y, bajo el argumento de que le estaba absolutamente vedado intervenir en el caso, interpuso formal acción de amparo ante el superior tribunal de justicia local contra la decisión de la Cámara Primera en lo Criminal que había rechazado su inhibición.

-con fecha 11 de septiembre de 1996, la corte local rechazó la acción deducida por el juez Pafundi, y le remitió el expediente para que continúe con su tramitación; en virtud de ello, el 26 de septiembre de 1996, dicho magistrado dispuso dar vista de lo actuado a las partes (fs. 2302).

-el 4 de octubre de 1996, la defensa recusó nuevamente al juez Pafundi, quien —con fecha 30 de diciembre de 1996— rechazó el planteo, remitió el respectivo incidente a la alzada y suspendió la vista que había ordenado a fs. 2302 (fs. 2318/2319).

-el 17 de septiembre de 1998 se remitió el expediente principal al superior tribunal local —a raíz de un pedido efectuado en un incidente de excarcelación— (fs. 2329), que fue devuelto el día 28 del mismo mes y año.

-el 4 de febrero de 1999 el agente fiscal se presentó en la causa y solicitó en préstamo el expediente a efectos de tomar conocimiento de lo actuado y postular las medidas pertinentes para la reanudación del trámite correspondiente (fs. 2351); a raíz de ello, con fecha 15 de febrero de 1999, la fiscalía replanteó la investigación en los términos fácticos allí precisados y solicitó la indagatoria de los imputados (fs. 2353/2355).

-según surge del certificado de fecha 22 de octubre de 1999 que luce a fs. 2374, a raíz de un problema de salud padecido por el juez Pafundi, se remitió el expediente al juez subrogante que por turno correspondía, quien —como ya se había excusado con anterioridad en la causa— la remitió al que le seguía por orden de turno. Igual temperamento adoptaron los magistrados que le sucedieron, hasta que el 2 de diciembre de 1999, la Dra. Siedlecki, citó a los imputados a prestar declaración indagatoria —conforme lo había requerido el fiscal a fs. 2353/2355—, y elevó el legajo de fotocopias a la alzada oponiéndose a las inhibiciones formuladas por los magistrados que la habían precedido en la actuación (fs. 2382).

-con fecha 9 de febrero de 2000, la Dra. Siedlecki suspendió las audiencias fijadas a fs. 2382 hasta que la alzada se pronunciara en torno al juez que debía asumir la tra-

mitación del sumario (fs. 2386).

-el 15 de marzo de 2000, la Cámara Primera en lo Criminal no hizo lugar a la inhibición del juez Héctor Leguizamón Pondal y dispuso que continuara con la instrucción de la causa (fs. 2401/2403).

-el 14 de septiembre de 2000, el mencionado magistrado le corrió vista al agente fiscal, quien a fs. 2419/2420 postuló la recusación del juez Leguizamón Pondal; por su parte, el magistrado —con fecha 10 de noviembre de 2000— hizo lugar a la recusación planteada y remitió el expediente al subrogante legal (fs. 2422/2424).

-con fecha 18 de abril de 2001, se avocó al conocimiento de la causa el nuevo juez de instrucción, Dr. Gregor Joos, quien tras notificar a los imputados de su intervención fijó las audiencias para recibirles declaración indagatoria (fs. 2436); sin embargo, con motivo de un planteo de prescripción de la acción penal deducido por la defensa, suspendió las audiencias fijadas y formó el incidente respectivo.

-una vez rechazado el planteo de prescripción por la alzada —17 de diciembre de 2001—, el juez de grado le dio nueva intervención al fiscal, quien a fs. 2461/2463 reiteró su pedido de que se les reciba declaración indagatoria a los imputados.

-el juez de instrucción citó nuevamente a indagatoria a los imputados (22 de abril de 2002), quienes finalmente prestaron declaración con fecha 10 de junio de 2002 (fs. 2513/2519); con fecha 27 de junio de 2002 se dictó el auto de procesamiento (fs. 2530/2555) que, recurrido por la defensa, fue confirmado por la alzada (fs. 2638/2641).

-con fecha 13 de diciembre de 2002, el agente fiscal formuló requerimiento de elevación a juicio en orden al delito de homicidio en agresión —art. 95 del Código Penal— (fs.

2663/2683), el expediente fue elevado a la Cámara Segunda en lo Criminal con fecha 27 de febrero de 2003 (fs. 2708), y tras resolverse el 8 de julio de 2003 las excusaciones formuladas, el 3 noviembre de 2003 se decretó la citación a juicio (fs. 2751); desde esa fecha y hasta el mes de diciembre de 2004 se sustanciaron las distintas recusaciones e inhibiciones planteadas en la etapa de juicio.

-el día 16 de marzo de 2005, a raíz de la sanción de la ley 25.990, la defensa formuló un nuevo pedido de prescripción de la acción penal, que fue rechazado por la cámara con fecha 29 de abril de 2005; y que motivó sucesivas impugnaciones que finalmente dieron lugar a la queja en estudio.

Como puede advertirse de la reseña efectuada, el proceso se ha originado hace más de dieciséis años, por un hecho cuya pena máxima no excede de los seis años de prisión (art. 95 del Código Penal, según el requerimiento de elevación a juicio de fs. 2663/2683), sin que hasta la fecha se haya llegado a un pronunciamiento que defina la situación de los procesados frente a la ley penal.

5°) Que la situación planteada en autos es sustancialmente idéntica, mutatis mutandi, a la de Fallos: 322:360 (disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano) y 327:327, a cuyas consideraciones corresponde remitir en razón de brevedad.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho. Hágase saber, agré-

-//-guese la queja al principal y, oportunamente, remítase.  
ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI -

B. 2277. XLI.

RECURSO DE HECHO

Bobadilla, Jorge Raúl y otros s/ homicidio  
en agresión - tres hechos en concurso real  
—causa n° 20.246/05—.

JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY  
(según su voto).

ES COPIA

VO-/-





-//-TO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Considerando:

Que en el sub lite se plantean cuestiones sustancialmente análogas a las resueltas en la causa S.2491.XLI “Santángelo, José María s/ defraudación por administración fraudulenta”, sentencia del 8 de mayo de 2007 (disidencia de la jueza Argibay), a cuyos fundamentos corresponde remitir en honor a la brevedad.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a la doctrina aquí expuesta. Notifíquese y cúmplase. CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

Recurso de hecho interpuesto por **Jorge Bobadilla y otros**, representados por el **Dr. Oscar Raúl Pandolfi**.  
Tribunal de origen: **Superior Tribunal de Justicia de Río Negro**.  
Tribunales que intervinieron con anterioridad: **Cámara Ira. de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro**.